

Considerando que se dan las causas de revocación al no reunir los requisitos para su autorización;

Vistas las Leyes Orgánicas 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, previo trámite de audiencia de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, ha resuelto:

Revocar la autorización concedida para impartir enseñanzas de educación de adultos, equivalentes a nivel de Educación General Básica al centro privado «Genaro Poza», con domicilio en la calle Loreto, número 2, de Huesca, a partir de la fecha de esta Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, previa la preceptiva comunicación a este Ministerio.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de enero de 1995.—P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988), el Secretario de Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa.

5158 *ORDEN de 2 de febrero de 1995 por la que se concede autorización definitiva de apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Especial denominado Aidemar, de San Javier (Murcia).*

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan García García, en representación de AIDEMAR (Asociación para la Integración del Deficiente en la Comarca del Mar Menor), en solicitud de autorización para la apertura y funcionamiento de un centro privado de Educación Especial, que se denominaría Aidemar, a ubicar en la calle Fernández Caballero, sin número, de San Javier (Murcia),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Conceder autorización definitiva de apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Especial, cuyos datos se detallan a continuación:

Denominación: «Aidemar».

Localidad: San Javier.

Municipio: San Javier.

Provincia: Murcia.

Domicilio: Calle Fernández Caballero, sin número.

Persona o entidad titular: AIDEMAR (Asociación para la Integración del Deficiente en la Comarca del Mar Menor).

Queda constituido el centro de la siguiente forma:

Cuatro unidades de Educación Especial para alumnos de seis a dieciséis años.

El centro deberá cumplir lo dispuesto en la Orden de 18 de septiembre de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre), por la que se establecen las proporciones profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades especiales.

Segundo.—El centro deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE CPI/91, de Condiciones de Protección Contra Incendios de los Edificios, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo.

Contra esta Orden, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el día de su notificación, previa comunicación a este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Lo que comunico para su conocimiento.

Madrid, 2 de febrero de 1995.—P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 23), el Secretario de Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

5159 *ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que se amplía una unidad de Educación Infantil, segundo ciclo, al centro docente privado Juan XXIII, de Ibiza (Baleares).*

Vista la solicitud presentada por don Domingo Moro Planells, como representante de la titularidad del centro privado de Educación Infantil Juan XXIII, domiciliado en la avenida de Ignacio Wallis, sin número de Ibiza (Baleares), sobre ampliación de una unidad de Educación Infantil, segundo ciclo, que, unidas a las cuatro unidades anteriormente autorizadas, según Orden de 29 de julio de 1994, daría lugar a un centro de cinco unidades de Educación Infantil de segundo ciclo.

Este Ministerio, de conformidad con el artículo 14.1 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 9), ha resuelto:

Autorizar al centro de Educación Infantil Juan XXIII, domiciliado en la avenida de Ignacio Wallis, sin número de Ibiza (Baleares), la ampliación de una unidad de Educación Infantil, segundo ciclo, con 25 puestos escolares, que unidos a los noventa y ocho ya autorizados, dan una capacidad para el centro de 123 puestos escolares y cinco unidades.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del centro de adaptarse, en los plazos previstos por el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 28), a la relación máxima profesor/alumnos por unidad establecida como requisito mínimo en la normativa al respecto.

El centro deberá cumplir la Norma Básica de los Edificios NBE CPI/91, de Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo.

Contra la presente Orden, el interesado podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el día de su notificación, previa comunicación a este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Madrid, 20 de enero de 1995.—P. D. (Orden de 2 marzo de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), la Directora general de Centros Escolares, Carmen Maestro Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Régimen Jurídico de los Centros.

5160 *ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que se autoriza la ampliación de dos unidades de Educación Infantil, segundo ciclo, al Centro privado «Atenea», de Mérida (Badajoz).*

Vista la solicitud presentada por don Miguel A. Pérez García, como representante de la titularidad del Centro privado de Educación Infantil «Atenea», domiciliado en la calle Mario Roso de Luna, sin número, de Mérida (Badajoz), sobre ampliación de dos unidades de Educación Infantil, segundo ciclo, que, unidas a las cuatro unidades anteriormente autorizadas, según Orden de 19 de mayo de 1994, daría lugar a un centro de seis unidades de Educación Infantil de segundo ciclo.

Este Ministerio, de conformidad con el artículo 14.1 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 9), ha resuelto autorizar al Centro de Educación Infantil «Atenea», domiciliado en la calle Mario Roso de Luna, sin número, de Mérida (Badajoz), la ampliación de dos unidades de Educación Infantil, segundo ciclo, con 50 puestos escolares, que unidos a los 160 ya autorizados, dan una capacidad para el centro de 210 puestos escolares y seis unidades.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del centro de adaptarse, en los plazos previstos por el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, modificado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 28), a la relación máxima Profesor/alumnos por unidad establecida como requisito mínimo en la normativa al respecto.

El Centro deberá cumplir la Norma Básica de la Edificación NBE CPI/91, de Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo.

Contra la presente Orden, el interesado podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos